

**El nuevo éxodo latino**

*Un nuevo muro para la integración latinoamericana emerge en la frontera norte de Chile. Xenofobia, abuso de autoridad y una creciente mafia de coyotes para sortear los limítrofes campos minados, son el panorama que enfrentan quienes quieren llegar por tierra al país austral. La dureza de los controles se aplica en especial a los viajeros provenientes del  Pacífico colombiano, una de las zonas con mayor desplazamiento del continente por motivos de violencia y desigualdad económica. Este es el panorama que enfrenta la creciente ola de migración latina al sur, y que dista mucho de las promesas de oportunidades que inundan los discursos oficiales.*

El pasado 22 de septiembre, ante un grupo de 200 empresarios norteamericanos en Manhattan, los presidentes de Colombia, Chile, México y Perú presentaron en Estados Unidos la Alianza del Pacífico. Los mandatarios hablaron del buen momento por el que pasan sus economías, elogiaron las ventajas de un mercado de 200 millones de personas que, una vez aprobado, desgravará el 92 por ciento de los productos que intercambia y aseguraron, con toda suerte de adjetivos, que este era un tratado incluyente, abierto al mundo.

Sin embargo, a miles de kilómetros de este salón, en Chacalluta y Colchane, los puestos fronterizos chilenos que colindan respectivamente con Perú y Bolivia, otros son los discursos escuchados por los más de 8.000 colombianos que al año buscan ingresar a este país:

*“La familia de Pablo Escobar no va pa’ Chile”.*

*“Todos los colombianos son putas y traficantes”.*

*“Estos vienen aquí a robar”.*

Con estas expresiones se enfrentan a diario los migrantes que, tras miles de kilómetros de travesía, encuentran bloqueado el ingreso a Chile a discreción de los agentes fronterizos de este país. Son viajeros humildes, cuya mayoría huye de la violencia mafiosa de Colombia y la pobreza de la región del Valle del Cauca, especialmente la del puerto de Buenaventura, donde por estos días es común hablar del “*nuevo sueño americano*”: Antofagasta, la principal ciudad minera al norte de Chile.

Para este reportaje un equipo liderado por el diario El Mercurio de Antofagasta, de Chile y la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS, en alianza con el portal colombiano Agenda Propia, el peruano Útero.Pe y VICE Colombia, se sumergió en una realidad que aún está ausente en los ampliamente anunciados esfuerzos de integración latinoamericanos. El propósito era revelar una ruta migratoria plagada de tropiezos y peligrosas frustraciones. El pillaje y el robo, las redes de coyotaje y de trata de blancas, los largos recorridos ilegales que se abren por el desierto, y el creciente racismo xenófobo que los espera en su destino final, son el pan de cada día de quienes han creído que el sueño de la publicitada integración, también se traducirá en oportunidades para los más necesitados.

No deja de ser paradójico que sea Buenaventura el epicentro de esta migración desde el norte hacia el sur del continente. Un puerto que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos bautizó como “*la capital de la Alianza del Pacífico*”.

“*Aquí no tenemos servicio de agua potable, solo cuatro horas promedio en el día; no hay un relleno sanitario, y no existe un foco de empresas que genere empleo*”, se queja Edwing Janes Patiño, presidente del Concejo de Buenaventura.

Esto es sólo una pequeña evidencia de los males que hoy padece una ciudad de 380 mil habitantes, por la que pasa el 60 por ciento del comercio exterior colombiano, unas 15 millones de toneladas de mercancía al año. En el puerto, los niveles de pobreza, analfabetismo y desescolarización superan con honores los promedios de este país, y sus calles y barrios, muchos de ellos construidos por los afrocolombianos como chabolas palafíticas sobre el mar, han sido el escenario durante los últimos tiempos de una de las más sangrientas guerras que libran las bandas de narcotraficantes para controlar la salida de droga por el Pacífico colombiano y la entrada de insumos para la producción de narcóticos.

En Buenaventura, la extorsión se ha convertido en ley. Así como las impasables fronteras invisibles, dibujadas por los combos armados entre los barrios. Leyes que de no cumplirse, acarrean la pena de muerte, en muchos casos a manos de descuartizadores que han hecho de los cuerpos desmembrados el más frecuente titular de apertura en las páginas de los diarios y los noticieros locales.

Entre enero de 2013 y septiembre de este año, 28 personas fueron descuartizadas en la ciudad. Como muchos desmembramientos fueron cometidos en una misma vivienda, ahora en la ciudad se habla de las “*casas de pique*”. Así, en el puerto el miedo se arraigó, la falta de trabajo es la constante y por eso cada vez es más costumbre dejarlo todo: 13.000 bonaverenses salieron de sus hogares este año.

Una popular canción de reaggetón que suena en las calles de Buenaventura da luces de la ruta que muchos han emprendido:

*Una amiga mía se cansó de la rutina de todos los días*

*Buscar trabajo que no conseguía*

*Sacó el pasaporte y se fue para Chile…*

Es un viaje largo e incierto. Emprendido también en Tumaco, Cali y otras ciudades y municipios del suroccidente de Colombia; 2.800 kilómetros de carreteras ecuatorianas y peruanas, recorridas en bus y de manera legal gracias a la tarjeta andina, hasta encontrarse con una barrera alimentada de prejuicios, en los puestos fronterizos de Chacalluta y Colchane, en las fronteras de Perú y Bolivia respectivamente.

Allí, para varios funcionarios aduaneros, ser colombiano es sinónimo de delincuente. El estereotipo ha sido alimentado por el alto número de empleadas en burdeles y bares exclusivos para hombres, y las noticias esporádicas relacionadas con el narcotráfico, en ambos casos con participación de colombianos. En septiembre, por ejemplo, fue capturada en Santiago, la capital de Chile, Fanny Grueso Bonilla, alias ‘La Chily’, buscada en Colombia por pertenecer presuntamente a la banda narcotraficante ‘Los Urabeños’ y ser dueña de una de las tenebrosas “casa de pique” de esa realidad de la que huyen los bonaverenses.

Pero las restricciones van más allá. Según los múltiples testimonios recogidos durante este reportaje, en la frontera de los tres países, el color de la piel es una variable que cada vez tiene más peso a la hora de determinar el rechazo. Las autoridades lo niegan. En los dos puestos fronterizos los funcionarios coinciden en decir que “*los motivos más frecuentes de rechazo son documentos de identidad vencidos, no demostrar suficiente solvencia económica para garantizar la estancia en el país o mentir sobre su real intención de ingreso a Chile*”. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil que ayudan a migrantes denuncian que el ingreso al país está dependiendo exclusivamente del ánimo del funcionario en ventanilla, amparado en una controvertida ley que les otorga “*discrecionalidad*”.

**Entre la xenofobia y coyotes**

El principal destino al norte de Chile es Antofagasta, una ciudad construida a punta de migraciones. Enclavada en el desierto, sus calles huelen a la arena del vasto desierto que la rodea, y al mar de la costa por donde los puertos mineros exportan el material de una de las mayores reservas de cobre del mundo.

Curiosamente, hace siglo y medio los migrantes en este lugar eran los chilenos, cuando era territorio boliviano. Después de la Guerra del Pacífico ya quedaron jugando de locales, pero igual recibiendo por temporadas olas de migración de europeos como griegos y croatas. Pero nunca antes se había vivido lo de ahora.

Según cifras oficiales, en menos de una década a esta ciudad han llegado más de 10.000 colombianos, pero los cálculos extraoficiales dan cuenta de 15.000, casi el cinco por ciento de la población antofagastina. La colonia colombiana, a diferencia de las otras que han llegado, se ha hecho notar por su espíritu emprendedor y su don de gentes, algo que valoran mucho, por ejemplo los puestos reservados para servicio al cliente.

Pero al mismo tiempo, el ambiente alegre que desborda los estándares del recatado Chile, junto a hechos de violencia e inseguridad que se atribuyen a esta migración, ha empezado a generar diferencias con los locales.

Un hecho que quedó grabado en la memoria, y marcó las tensiones que ha traído el éxodo de colombianos, se produjo en octubre de 2013. Luego del empate 3 a 3 entre las selecciones de Chile y Colombia durante las eliminatorias al Mundial de Fútbol, los hinchas de ambos equipos se enfrentaron a palo y piedra en las calles de Antofagasta. Un hecho inédito en la tranquila ciudad.

Dos semanas después, un pequeño grupo de antofagastinos buscó realizar una marcha anti inmigrante colombiano. Una convocatoria que no sólo expresaba la molestia por lo sucedido, sino que también estaba marcada de un fuerte tufillo xenófobo y racista. El plantón no tuvo mayor quórum, pero las proclamas vitoreadas por los pocos asistentes en contra de los colombianos se colaron entre los titulares de varios medios del país: “*Queremos que se vayan los negros delincuentes, las prostitutas, que se vayan los colombianos que no aportan*”; “*Una colombiana me quitó a mi marido”,* registró por ejemplo una reportera de El Mercurio de Antofagasta.

Uno de los argumentos frecuentes de la inconformidad con los colombianos, es la supuesta relación de muchos migrantes con estructuras de crimen organizado y de narcotraficantes. A pesar que las cifras oficiales de la Defensoría Penal Pública chilena muestran que el 96 por ciento de los delitos en la región de Antofagasta son cometidos por nacionales, un sector importante de la población sigue culpando a los recién llegados de una “*mayor sensación de inseguridad*”. Este imaginario colectivo se refuerza cada vez que detienen a alguien de esa nacionalidad por delitos relacionados con drogas.

Mientras los colombianos en tierras chilenas se las tienen que ver con los prejuicios, muchos otros quedan atascados en Tacna, Perú. No hay lugar en la frontera que sea más emblemático de su odisea que una pequeña plaza a las afueras de la terminal terrestre de transporte, a la que se refieren como el “Muro de los Lamentos”.  Allí, todos los días, se encuentra el puñado de colombianos que son rechazados luego de intentar ingresar a Chile por el puesto aduanero de Chacalluta.

En el ‘Muro’, cualquier día de la semana, deambulan personajes como James Murillo, un colombiano negro, alto y fornido,  proveniente de Buenaventura, quien al momento de la visita de los reporteros de este especial llevaba tres días sin poder ingresar a Chile. A James lo sacaron amenazado del puerto de Buenaventura; a su familia le quitaron sus bienes, y a su compañera, quien lo espera en Chile, le asesinaron un familiar en Cali.

James tenía una carta de desplazado emitida por el gobierno colombiano, pero llevaba tres días durmiendo en el suelo, sin un centavo en el bolsillo, temeroso de que los agentes chilenos le negaran la entrada y lo alejaran aún más de su familia. Un drama que es común encontrar en esta ciudad fronteriza de Perú.

Según las autoridades de Migraciones, cada día, un mínimo de 15 colombianos intenta cruzar legalmente la frontera con Chile sin éxito. Sólo en este punto de control en Chacalluta, en lo corrido del año hasta septiembre, 2.365 colombianos fueron devueltos.

No se trata de casos aislados: el año pasado, según la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), los funcionarios aduaneros les negaron la entrada al país a 12.655 extranjeros; de ellos, casi la mitad, 5.688, son colombianos.

Tan común se ha vuelto esta práctica, que en las fronteras con Bolivia y Perú el término “rebote” se utiliza con frecuencia para referirse a todos aquellos que, por la falta de un papel, una apostilla o el criterio del funcionario de turno, terminan quedándose atascados en medio de su viaje, sin nada en el bolsillo.

Varias organizaciones de la sociedad civil chilena han hecho seguimientos de estos casos, entre ellos el Instituto Nacional de Derechos Humanos  (INDH). Su directora, Lorena Fries, asegura que en los puestos fronterizos de Chile “*hay situaciones de xenofobia que se presentan por parte de algunos agentes del Estado*”.

Durante una visita que el INDH realizó a Colchane en 2013, migrantes denunciaron que “*personal de la Policía de Investigaciones de Chile les lanzaron los pasaportes y los insultaron con epítetos racistas*”, agrega Fries.

Viendo sus posibilidades de ingreso reducidas por la frontera peruana, los colombianos rebotados prueban suerte a través de Pisiga, Bolivia, solo para encontrarse, de nuevo, con el rechazo de la discrecionalidad de los agentes de aduana amparados en las regulaciones migratorias vigentes.

Así, lo que debía ser un viaje en bus directo desde Colombia hasta Chile, termina interrumpiéndose de repente, sin que medie mayor advertencia. Desamparados, los colombianos no tienen a dónde más que acudir que a hogares de tránsito como el de las Hermanas de la Caridad, fundado hace tres años en la localidad altiplánica de Pisiga.

Según Sor Margarita Oyarzo, la religiosa chilena que actualmente administra la casa, entre enero y septiembre de este año, unas 800 personas pasaron por el hogar; el 100 por ciento provenía de Colombia. “En mi casa tengo el apartheid”, le dijo una de las religiosas que trabaja en ese hogar a la misión del INDH que las visitó en 2013. Muchos aseguran que los devolvieron por un papel; otros, por su nacionalidad. “*Nuestro trabajo es acogerlos, darles orientación. Les decimos que regresen a su país si son rebotados, pues eso es mejor a que pasen irregulares, que pasar así les va a traer problemas en Chile. Pero muchos dicen que quedaron sin dinero en el camino y no pueden regresar a su país, y prefieren irse por la vía irregular*”.

Numerosos testimonios recogidos en Tacna y en Pisiga dan cuenta del surgimiento de redes de coyotaje y trata de blancas alrededor de la población rebotada. A las afueras de las terminales de transporte, adonde llegan luego de ser rechazados en la aduana,  los migrantes son abordados por personas que aseguran el paso por el desierto a cambio de una suma que oscila entre 60 y 300 dólares.

Los coyotes o “jaladores” también ofrecen documentos falsos con la garantía del ingreso. Sin embargo, como cuenta un joven colombiano que se hace llamar Jesús, “*a uno le piden 300 dólares, uno les cree y les paga y luego lo rebotan en la frontera. Uno se lo vuelve a cruzar, pero el coyote ya no lleva la plata encima. Uno no puede hacer nada*”.

Muchos, sin embargo, emprenden el camino ilegal, y parten en caravanas clandestinas por el desierto, corriendo el riesgo de ser encontrados por los carabineros o, mucho peor, caer víctima de una mina antipersonal, sembrada décadas atrás, durante los conflictos territoriales que han vivido estos países.

Las mujeres, en particular, parecieran encontrar una alternativa adicional. Así lo sugiere en Tacna el padre Emilio, del Servicio Jesuita al Migrante, quien también administra un albergue para rebotados. El sacerdote ha detectado que la mayoría de los rechazados, son hombres. “*Eso solo nos dice cuán efectivas son las redes de prostitución*”. Las mujeres suelen pasar con mayor facilidad, probablemente por cuenta de las buenas gestiones de redes a servicio de prostíbulos y bares conocidos como chupódromos. En estos últimos las extranjeras sirven de acompañantes para incentivar el consumo de alcohol de los clientes. La lógica es sencilla: por cada botella de cerveza que beba el cliente, la mujer recibe una comisión. Para cualquier colombiana que se decida a trabajar en estos lugares, encontrar el nexo es más que fácil, basta con ir al “Muro de los Lamentos” y pedir el contacto. Todos se conocen pero nadie ve nada.

La creciente migración colombiana en Chile ha provocado un intenso debate nacional en torno a las políticas actuales de migración, fundamentadas en la Ley de Extranjería de 1975 que, para muchos, contiene una visión caduca de los procesos migratorios arraigada en la concepción de la seguridad nacional de la Guerra Fría.

Las pocas reformas que se han sugerido para la Ley siguen recibiendo críticas de organizaciones como Ciudadano Global. Su directora, Marcela Correa, asegura que los cambios que se pretendían efectuar en el gobierno anterior eran solo “*en términos económicos y no sociales… El migrante es visto como mano de obra y no como una persona*”.

Este parece ser el gran dilema de la sociedad chilena hoy: ¿cómo se debe relacionar el país con los migrantes?  Una encuesta presentada en agosto en Antofagasta revela la complejidad de la discusión entre la opinión pública: mientras que el 50,1 por ciento de los antofagastinos no está de acuerdo con la inmigración, paradójicamente el 59,4 por ciento reconoció que los migrantes aportan al crecimiento y al desarrollo de Chile.

No obstante, más allá del debate interno, el problema resulta ausente en los múltiples discursos de integración de los presidentes de Chile, Perú, Colombia y México que lideran la Alianza del Pacífico. No es un tema menor. Estas restricciones, agravadas por la creciente segregación por origen o color de piel, pueden dar al traste con iniciativas que en lo macro pueden ser esperanzadoras. Atender con especial interés estos problemas, e involucrarlos desde ahora como prioridad en la agenda de la integración, ayudará para que los cambios que lleguen el día de mañana, realmente se traduzcan en oportunidades precisamente para quienes más lo necesitan.

**La capital de la Alianza del Pacífico y de la expulsión**

*Buenaventura, el puerto por donde pasa el 60 por ciento del comercio colombiano, es la ciudad que más desplazamientos produce en Colombia. Sus habitantes huyen de la pobreza y la violencia causada por el narcotráfico hacia la que consideran la nueva tierra de las oportunidades: Chile.*

En las esquinas del puerto de Buenaventura, en el Pacífico colombiano, es común encontrar que se habla del *boom chileno*; a quien se le pregunte da razón de que el primo, el sobrino, el amigo, el vecino o algún conocido empacó maletas y viajó a Chile. Por supuesto, cada quién le agrega lo propio hasta construir un imaginario de las oportunidades reservadas a quien se aventure a recorrer 2.800 kilómetros y tres países. Parece poco.

Los motivos son muchos, pero principalmente salen de la región para escapar de una realidad abrumadora. La violencia armada, el desempleo y la pobreza son las razones que obligan a que migren al no encontrar una pronta solución a las difíciles condiciones que les tocó vivir. Es la zona con mayores índices de expulsión del continente en los últimos años por motivos de violencia y pobreza.

El fenómeno se ha acrecentado durante 2013 y 2014, debido al recrudecimiento de la guerra entre bandas de narcotráfico por el control de un corredor estratégico que conecta a Colombia con el Pacífico.

Ipolita Panameño, madre de familia, relata que sus hijos gemelos, peluqueros, viajaron hace dos años a Chile.

“*Ellos se fueron por la violencia, por su seguridad. En aquella época estaban matando a peluqueros y les tocó salir*”, cuenta la mujer. Fue una dura decisión, pero la tomaron “*porque estaban corriendo mucho peligro*”. En Buenaventura, las peluquería son un centro frecuente de encuentro y conversación, y en medio de la cruenta guerra que libran las bandas criminales, el peluquero se convierte en un riesgo para los combos rivales.

Doña Ipolita, de unos 70 años, dice que hoy sus hijos están bien, que en Chile “*han hecho un buen trabajo, tienen amistades, clientela y con su profesión sostienen a sus familias*”. Al preguntársele sobre la situación de Buenaventura, prefiere callar, más bien se refiere a que también espera pasar su vejez en otra ciudad donde la vida sea un poco más amable.

El fotógrafo Germán Mosquera cuenta como sus tres hermanas decidieron migrar, una de ellas a Chile. Si bien reconoce que donde están sus seres queridos la situación también es difícil, sostiene que “*de todas formas están mejor que acá. Una persona al ver su familia aguantando hambre tiene que salir del país a buscar un mejor futuro, eso nos tocó*”.

Las necesidades y razones para salir de Buenaventura son tan extremas que la gente prefiere pedir dinero incluso a tasas de usura o embargar las casas.

“*Uno ve gente buscando plata como sea para irse, pero las cosas son así. Mire, aquí empleo no hay, está pesao, no hay las mínimas condiciones para vivir, por eso los muchachos se dedican hacer cosas malas, y de violencia ni hablemos, ha mejorao, pero se siente*”, agrega Germán.

El ‘*boom chileno’* es tan fuerte que hasta Letter & J Money, uno de los grupos musicales revelación de la ciudad, compuso una canción alusiva a este fenómeno. ‘La chilena’ cuenta la historia de una mujer que se fue para el país suramericano porque no encontraba trabajo en Buenaventura. Este tema musical es uno de los más sonados en las emisoras del pueblo.

“*La canción ha pegao porque habla de una problemática de la población, que está viajando a buscar otros horizontes por la economía*”, dice Marlon Mosquera, un joven que se gana la vida vendiendo discos ‘piratas’ en las calles del puerto.

El aumento de población que sale a buscar otros horizontes también se debe a la hermandad que existe entre las comunidades negras del Pacífico colombiano.

“*Cuando ya la gente se ubica en ese país, y como decimos en Buenaventura, ‘la cosa está buena’, empiezan a llamar a los padres, a los hermanos, a los hijos… entonces toda la población empieza a migrar”,* dice Rodrigo Mena Valencia, funcionario de la alcaldía.

Valencia añade que la gente está migrando hacia Chile“*por los costos, es mucho más económico para viajar, por la cercanía y porque allá se está presentando la facilidad*”.

Entre tanto, en Buenaventura solo reinan las necesidades básicas insatisfechas: no hay agua potable, los servicios de salud y educación son regulares, y hay un alto índice de desempleo. En una ciudad que ha sido llamada por el presidente colombiano Juan Manuel Santos “La capital de la Alianza del Pacífico”, es evidente que las familias no tienen viviendas dignas, los pocos espacios para la recreación y el deporte están deteriorados, y no es difícil encontrar un sinnúmero de obras inconclusas.

“*Estamos en un entorno geográfico rico en cuanto a su biodiversidad, vivimos en uno de los puertos más importantes del suroccidente colombiano, es un contraste con la población porque estamos inmersos de unas riquezas, pero nuestra población está totalmente pobre (…) estamos de espalda a la inversión del Estado*”, asegura Edwing Janes Patiño, presidente del Concejo de Buenaventura.

A este panorama social, se suma el conflicto armado. Allí convergen diversos grupos ilegales como la guerrilla de las FARC, las bandas criminales y organizaciones dedicadas al narcotráfico, que se disputan el control del territorio.

Dichos grupos han sembrado el terror en la zona, presentándose las más despiadadas acciones de violencia, hechos que en los últimos tres años se han recrudecido. Lo más triste: sus disputas se han presentado en plenos barrios populares dejando una profunda huella de muertos y desaparecidos.

Las dinámicas delictivas llevaron a la Defensoría del Pueblo en enero del 2013 a calificar al 35 por ciento de los barrios de la ciudad como zonas de riesgo. Según cifras oficiales, las confrontaciones también han generado graves casos de desplazamientos, se indica que en el último año más de 13.000 personas abandonaron sus hogares.

Para contrarrestar la ola de violencia y de terror en Buenaventura, el pasado mes de mayo, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció la militarización del puerto y confirmó que la seguridad estaría a cargo de 2.400 militares y policías.

“*El Gobierno colocó un plan de choque militar en la ciudad para bajar un poco los efectos de la violencia, pero nosotros que estamos en los sectores somos conscientes que eso no ha servido para nada. La solución de lo que pasa en Buenaventura no es pie de fuerza, es inversión social*”, dijo Gilberto López, asesor de Derechos Humanos y coordinador de la Capilla de la Memoria de la Parroquia San Pedro Apóstol, ubicada en el barrio Lleras, uno de los sectores en disputa.

Así las cosas, el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, como es conocida oficinalmente Buenaventura, no es un lugar digno para vivir. Hoy sus habitantes prefieren apostarle a Chile, un país donde hay posibilidades y ofertas laborales, la economía es estable y, por encima de todo, no los obliga a sentir que su vida y la de sus seres queridos pende a cada instante de un hilo.

**Una barrera con cimientos de prejuicios**

*Luego de atravesar la mitad de Suramérica, los migrantes colombianos llegan al sur de Perú y se encuentran con el rechazo discrecional de las autoridades migratorias chilenas. Con los bolsillos vacíos quedan en manos de traficantes de personas cada vez más hábiles a la hora de abrir rutas irregulares, y que aprovechan la inquebrantable fe de los viajeros en su anhelo de bienestar.*

En lo que va de este año, 2.365 colombianos han sido devueltos del puesto control de Chacalluta en la frontera de Perú con Chile. Ingresar a este país se ha convertido en una frustrante odisea para los migrantes colombianos, quienes deciden emprender caminos ilícitos marcados por redes de coyotaje y trata de personas.

James Murillo es un afrocolombiano alto y fornido. Ha llegado a Tacna, Perú, “*corrido*” de la violencia de su país. A él y a toda su familia les quitaron sus bienes y casi la vida. Tenían que irse ya mismito de Buenaventura, el puerto más importante del Pacífico colombiano. James no quiere o no puede identificar a quiénes lo amenazaban, dice que son los grupos paramilitares, las bandas, sobre todo las bandas, pero no quiere contar más.

–A mi vecina le mataron un hijo, ya. A todos, a todos nos amenazan– dice.

James tiene miedo, regresar a Colombia no es una opción y  el orgullo de sus demás compatriotas –que ‘amenazan’ con regresar a su país si los vuelven a  ‘rebotar’ de Chile– no le alcanza, no le sirve.

–Yo no me siento seguro de regresar a Colombia. No tengo nada allá: mi mujer y mis hijos ya están en Chile. Yo soy un desplazado –dice James, mientras desdobla un papel sucio y descolorido: la copia de su carta de desplazado.

Él ha dormido tres noches en el suelo y su caso se repite, literalmente, por miles en Tacna. Según las autoridades migratorias chilenas, cada día, un mínimo de 15 colombianos provenientes en su mayoría de Quindío, Cali y Buenaventura intenta cruzar legalmente la frontera con Chile sin éxito. Marzo fue el mes pico de las devoluciones: 506 en total. Sin la posibilidad de entrar, ellos regresan a Tacna donde deben buscarse la vida, prestarse algo que los cubra para aguantar el frío, mendigar algunos soles para pasar la noche, y llenar el estómago.

Encontrar un colombiano en Tacna es muy sencillo, la mayoría son afrodescendientes y todos, desde los taxistas hasta las autoridades, saben dónde están. Basta con ir al Terminal Internacional Manuel A. Odría y dirigirse al ‘Muro de los Lamentos’: una pequeña plaza a la salida del terminal de buses, donde todos los días nuevos y viejos colombianos se reúnen después de haber sido rechazados por las autoridades migratorias de Chile.

–Ahí van a lamentarse y contar sus penas una vez que los rechazan –cuenta un funcionario de Migraciones–. Cuando hay sol es mejor, ahí se les puede ver más, les gusta asolearse.

Efectivamente, desde las primeras horas de la mañana se les puede ver sentados en círculos, con las manos vacías, renegando y jurando que si la próxima vez los rechazan se regresarán, que tampoco están para que los maltraten, pues si les hubieran dicho que cruzar la frontera chilena era tan difícil hubieran elegido otro país. En Colombia nos dicen que estas cosas no pasarían. Que allí hay chilenos, peruanos, ecuatorianos y a todos los tratan por igual, comentan entre ellos a modo de reproche.

–Mamacita, escúcheme, si usted va para Colombia, el colombiano le da su cama y él duerme en el suelo –dice Jeffer, quien lleva tres meses esperando que su suerte cambie.

El ‘Muro de los Lamentos’ es el punto de reunión de todos aquellos que son rechazados por Chile. Allí se pueden encontrar ecuatorianos y también dominicanos jovencísimos que abandonaron sus países en busca del sueño sudamericano. Les han dicho que cruzando la frontera las oportunidades de trabajo serán mejores y que el sueldo mínimo está por los 700 dólares. Ni siquiera las autoridades migratorias peruanas son inmunes a esa promesa.

–Allá en Chile, una controladora de aduanas, como yo, gana lo mismo pero en dólares.

Sin embargo, todos los sueños se acaban al encontrarse con el funcionario de la aduana chilena. Se habla de maltratos y requisitos impensados con tal de no dejarlos entrar.

–A uno le piden constancia de trabajo, constancia de estar de vacaciones apostillado por el gobierno de Colombia, que la bolsa de viaje, que el cartón profesional, oiga, todo… –cuenta uno de los rechazados.

Los mitos acerca de los puestos de control migratorios son diversos. En el ‘Muro de los Lamentos’ se puede escuchar que el ingreso a Chile depende de detalles tan aleatorios como la ventanilla que le toque en el puesto de control de Chacalluta. Si la funcionaria de turno despertó de buen humor, quizás sea tu día de suerte.

Los puestos de control de Santa Rosa y Chacalluta están a una hora de distancia de Tacna, si se va en auto, y a hora y media si se toma un bus. El pasaje cuesta 18 y 13 soles, entre 7 y 5 dólares respectivamente. Esta suma, aparentemente módica, resulta inalcanzable para los colombianos. La mayoría de ellos invirtió sus ahorros en comprar un pasaje terrestre desde Bogotá hasta Santiago de Chile, creyendo que eso les aseguraría el ingreso. Al ser rechazados en Chacalluta, su bus los abandona y se encuentran en la calle, sin un peso y, sobre todo, con frío.

–La empresa Ormeño nos debería decir que el pasaje no nos asegura que lleguemos a Santiago, porque uno paga por llegar a Santiago no por quedarse acá –dice Edgar Daza, el colombiano de mayor edad reunido en el ‘Muro de los Lamentos’.

Edgar tiene 58 años y no piensa regresar a Colombia. Bajo ninguna circunstancia.

–Yo me le tiro a un carro porque para qué voy a volver sin plata. Llevao. Yo me le tiro a un carro y el gobierno de aquí pues que me entierre.

No hay de otra, Chile o Chile.

**Todos los caminos conducen al sur**

Inevitablemente, todos los colombianos se dirigen al ‘Muro de los Lamentos’ cuando son rechazados. No se trata de una atracción magnética, sino que allí se ubica el paradero final de los buses y colectivos que van a Chile. Cuando desorientados se acercan al lugar, algunos peruanos los abordan: “*¿Qué pasó, amiguito, te rebotaron?”* Este es el primer contacto de los traficantes de migrantes quienes ofrecen sus servicios y contactos desde 60 hasta 300 dólares.

–Acá se acercan, como lo ven a uno mirando para todos lados, vienen y te dicen que te pueden hacer pasar –cuenta uno de los colombianos rechazados, ocultando un poco su rostro con una gorrita–. Uno escucha de todo aquí, pero yo no quiero eso, yo quiero entrar por la legal porque uno ha venido a trabajar y a estar bien, no a hacer cochinadas.

Los traficantes de migrantes, más conocidos como jaladores, se aprovechan de la desesperación de los colombianos y prometen hacerlos entrar a Chile por el puesto de control fronterizo de Chacalluta. Aseguran contactos e influencias. Otras veces ofrecen fabricar documentación: constancias de trabajo, constancias de vacaciones, certificados de estudiantes firmados por el gobierno colombiano. Los más avezados ofrecen “*paso no habilitado*”, que es una forma menos aterradora de decir que los harán entrar de manera irregular. Además se ofrecen como los únicos que conocen el paso seguro a través de los peligrosos campos minados que los chilenos mantienen en la frontera, y donde hay algunos pocos registros de inmigrantes mutilados por las explosiones.

–A uno le piden 300 dólares, uno les cree y les paga y luego lo rebotan en la frontera y ya no se puede hacer nada. Uno se lo vuelve a cruzar, pero él ya no lleva la plata encima, y uno se queda sin nada –cuenta un joven colombiano que se hace llamar Jesús y carga una Biblia en el bolsillo.

Walter Goyzueta, presidente de la Junta de Fiscales de Tacna, explica que el delito de tráfico ilícito de migrantes “*se empezó a mover a raíz de la llegada de los colombianos*”, hace tres años, aproximadamente. Debido a ello se impulsó la creación de la Subcomisión de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de migrantes, como parte del comité de integración fronterizo entre Perú y Chile. Según refiere el fiscal Goyzueta, en las reuniones que sostienen, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) ha expresado, más de una vez, su preocupación por la presencia de colombianos que utilizan caminos ilegales para ingresar a Chile. El objetivo de esta subcomisión bilateral es descubrir cuáles son estas nuevas rutas e intercambiar información entre sus puestos fronterizos.

Ambos países han detectado que la mayoría de veces que un colombiano se aventura a entrar de forma irregular a Chile, lo hace acompañado de algún jalador que conoce bien la geografía de la zona. Goyzueta explica que ya han tomado conocimiento de la presencia de organizaciones de traficantes que ofrecen ese ‘servicio’. Sin embargo, el problema para identificarlas y describir su modus operandi, radica en el temor de los migrantes a continuar con la denuncia por más que hayan sido víctimas de estafa o maltrato.

–Hay evidencia pero no es suficiente para judicializar –explica Goyzueta–, el mismo colombiano no quiere colaborar, es por eso que estamos potenciando el apoyo a la víctima. Se tiene que entender que la situación de los colombianos en el Perú no es delito.

Tanto Goyzueta como las autoridades migratorias de Tacna se esfuerzan por recalcar que en Perú no existen extranjeros ilegales sino “*en condición irregular*”. En la práctica, la diferencia entre uno y otro término radica en que, al tratarse de una falta, nadie puede ser detenido por estar sin permiso en el Perú. Lo que procede en estos casos es la intervención.

Diariamente, el Departamento de Seguridad del Estado de Tacna, al mando de la comandante Giovannita Zegarra, realiza operativos de intervención a todos los extranjeros que se encuentran en el terminal de buses y en los lugares que ellos ya han identificado como punto de reunión de migrantes. El ‘Muro de los Lamentos’ es una parada obligatoria en su recorrido.

–Lo que hacemos es pedirles sus documentos, si no han excedido el tiempo de permanencia en el Perú, se pueden ir sin problemas –explica la Comandante Giovannita–. Si ya no tienen permiso para estar aquí, los llevamos a la comisaría, dejamos constancia que su tiempo ha excedido y luego se pueden ir. Es un trámite administrativo.

Los colombianos y los miembros de esta división de la Policía ya se conocen. Se ven las caras casi todos los días y, la mayoría de veces, se saludan con cordialidad. Los colombianos saben que si ya se les vencieron los días, solo les queda ir a la División, registrarse en el AFIS, el Sistema de Identificación de Huella Digital, y regresar a su rutina diaria. Mientras tanto, esperan el papel que les permitirá entrar a Chile o que, con ayuda divina, su suerte cambie.

Esta vez se llevan a Ordóñez, un moreno de aspecto risueño, alto y delgado como un carrizo. Este joven de labios gruesos y cabello rapado ya ha excedido el plazo de permanencia en el Perú por cuatro días.

–Pero es que a mí ya me llevaron ayer –dice–. Yo pago los días, no hay problema.

Cuando un extranjero en situación irregular quiere abandonar el Perú, debe pagar un dólar por cada día que estuvo sin permiso en nuestro país. Lo que Ordóñez quiere decir es que cuando intente entrar a Chile, nuevamente, pagará todos los dólares que le deba al Perú.

–Está bien –le dice uno de los policías del Departamento– nos acompañas una hora y luego regresas.

En sus operativos, la división de la comandante Giovannita se ha percatado de un hecho particular: Siempre hay menos mujeres que hombres intervenidos. Mientras que ellos deambulan por el mercado, el terminal o las calles cercanas; ellas, las pocas mujeres que quedan, prefieren permanecer en sus cuartos. Existe una razón para esto: mientras los hombres son estafados por los ‘jaladores’, las mujeres tienen un camino mucho más duro pero que les permite entrar a Chile.

**“Carne negra”**

En el ‘Muro de los Lamentos’ por cada diez hombres, solo hay una mujer. Sin embargo, Migraciones ha detectado que hombres y mujeres ingresan a Perú casi en la misma proporción. La diferencia se produce al momento de ver las devoluciones. La mayoría de hombres son rebotados, las mujeres pasan.

Para el padre Emilio, del Servicio Jesuita al Migrante, esto tiene una explicación. Cuando después de varios intentos de entrar a Chile, las mujeres se encuentran sin un sol para sobrevivir, el panorama que se les presenta es el siguiente: O consiguen un ‘trabajo’ y juntan dinero para la bolsa de viaje que les piden en Chile, o son contactadas por ciertas personas que las hacen cruzar la frontera de manera legal. En realidad, ambas alternativas están relacionadas, en ambos casos se trata de redes de prostitución mezcladas con otras redes de tráfico de migrantes.

Así, muchas de las migrantes eligen entre los chupódromos y los prostíbulos.

Los chupódromos no son otra cosa que bares de mala muerte. Allí, la función de la mujer consiste en hacer que el visitante tome la mayor cantidad de alcohol posible. Ellas ganan una comisión por cada botella de cerveza vacía. Los chupódromos más conocidos y donde se puede encontrar colombianas son el Embassy y el Egipto aunque también existen otros más pequeños y venidos a menos donde se puede disfrutar de su compañía por menor precio.

Sin embargo, desde hace dos meses la situación empezó a cambiar. Se creó una División de Trata de Personas en la Policía de Tacna que realiza operativos constantes. Esto ha disuadido a los dueños de los chupódromos de ‘contratarlas’ o, al menos, de exponerlas en vitrina. Ya no es tan sencillo conseguir colombianas abiertamente.

Pero siempre se puede contar con la discreción de los prostíbulos. Si uno le pregunta a cualquier taxista dónde puede encontrar colombianas, ellos responden: “*Ah, carne negra*”, e indican el camino. A quince minutos en auto, yendo por Pocollay se llega a los dos más conocidos de Tacna: el Venus y Las Cucardas, uno al lado del otro. Allí, colombianas y peruanas comparten el negocio, cuarto y clientes. Las tarifas van desde los 50 soles y pueden llegar hasta los 500 soles si uno quiere llevarse a la colombiana fuera del local.

–Yo todavía no he aceptado –dice, sentada al lado del ‘Muro de los Lamentos’, Marisel Quiñones, colombiana de Cali–. A veces las mismas chicas de acá, del ‘Muro’, le ofrecen ese trabajo a una. Antes prefiero intentar pasar una vez más o regresarme.

Algunos tacneños creen que con los colombianos ha llegado la prostitución. Pedro de Castro, abogado del Servicio Jesuita y encargado de orientar a los migrantes varados en Tacna, aclara que esa no es la situación. Para él, todo es consecuencia de la dura política migratoria de Chile. Al darse de narices con Chacalluta, un puesto de control inesperadamente duro, y sin un peso en el bolsillo, los migrantes hacen lo que sea para sobrevivir y cumplir su sueño de entrar a Chile.

Los Jesuitas reciben todos los días a colombianos, entre otros migrantes que tienen el mismo sueño de entrar a Chile. Desde enero hasta agosto de este año, han atendido a 216 colombianos, menos del 10 por ciento del total de migrantes –también colombianos– rebotados en el mismo período. Les brindan asesoría legal para no dejarse convencer por los tramitadores y también los apoyan con el menú. Diariamente, entre 10 y 13 migrantes almuerzan en el local ubicado frente al terminal.

–Que nos den la oportunidad, que todos no somos iguales, a veces cuando los rechazan ya no buscan por la buena sino por la mala, pero que nos ayuden, que queremos ir a trabajar legal –dice Jesús, agitando su Biblia.

**Un sueño cumplido**

No todas las historias terminan en expulsión o en procesos judiciales. Antes de concluir la visita a Tacna de este equipo periodístico, James Murillo logró reunir los 18 soles para ir a Chacalluta. Un grupo de sus paisanos lo acompañó al terminal, a despedirlo, a dejarle el número de teléfono por si acaso, pero, sobre todo, fueron a desearle buena suerte.

–El man tiene la casaca mía y yo no sé si pedírsela –le dice Ordóñez a Jeffer.

–Déjesela, déjesela que yo le consigo otra, hace frío en Santiago –le contesta.

Ya en el auto, James sonríe por primera vez desde que lo conocimos. Llena su ficha de Migraciones con el lapicero que Jeffer le ha regalado. Hoy todos están generosos, hoy puede ser un día para celebrar. Cada vez que un colombiano logra pasar Chacalluta, todos sus compañeros del ‘Muro de los Lamentos’ sienten que hay esperanza, que la próxima vez les puede tocar a ellos.

Los únicos que no están contentos con tanto colombiano en el terminal son los choferes y cobradores. La hostilidad se percibe, e incluso uno de los choferes chilenos se anima a decir que los colombianos están llevando mucha delincuencia a Antofagasta.

–El peruano no es así –dice, tratando de congraciarse con la reportera de este especial–. Él sí es trabajador.

Ya en Chacalluta, a James se le borra la sonrisa del rostro. Tal vez la ventanilla que le tocó era la de la mala suerte. Lo separan de la fila del resto de extranjeros y lo envían a una oficina. Que espere. De un momento a otro James desaparece, ya no está sentado en la oficina. Vamos en su búsqueda con cualquier pretexto. El policía chileno nos recibe con cierta desconfianza:

–¿El señor? Aquí está el señor, aquí sentado –responde mientras señala a James, medio escondido detrás de una ruma de documentos–. Ya mismo acabo con los papeles del señor. Si me espera, los puedo embarcar a los dos en un bus hacia Arica –dice, ahora, mucho más amable.

James nos mira de reojo y sonreímos mutua, pero discretamente ¿Acaso esa sí era la ventanilla de la suerte? James se va de Chacalluta con la casaca anaranjada de Ordóñez, el lapicero azul de Jeffer y los números de teléfono de todos los colombianos que lo acompañaron al terminal. Ambos levantamos la ceja a manera de despedida. Esta noche, en Chile, James por fin dormirá al lado de su mujer.

Volvemos a Tacna con la buena noticia. Al día siguiente, en el ‘Muro de los Lamentos’, los paisanos que rebotaron cuentan una y otra vez que James sí pasó. De pronto, uno de los colombianos más recelosos se separa del grupo y nos pregunta:

–¿Será que usted va pa’ la frontera hoy? Me gustaría que me acompañe.

**Un sueño construido de realidades**

*El boom económico por los altos precios del cobre atrajeron hace cerca de una década a los primeros colombianos al norte de Chile. Miles cruzaron sin dificultad. Se establecieron con éxito bien sea por el trabajo en las mineras o por su espíritu emprendedor. Con el voz a voz de buenos horizontes, la ola de colombianos creció exponencialmente y hoy ya son casi un cinco por ciento de los habitantes de la ciudad de Antofagasta, el principal punto de llegada. Pero en el último tiempo surgieron voces de rechazo culpándolos de todo, incluso del incremento en las infidelidades.*

Hace aproximadamente ocho años, el boom económico de la minería del cobre atrajo a la ciudad de Antofagasta, en el norte de Chile, a los primeros migrantes colombianos del Valle del Cauca. Cambiaron un paraíso natural abundante en naturaleza y ríos pero dominado por la guerra y la desigualdad, por el desierto más árido del mundo con oportunidades de estabilidad económica y una mejor calidad de vida.

Esos primeros migrantes no tuvieron problemas para pasar la frontera de manera regular y en Antofagasta encontraron trabajo rápidamente, lo que les permitió ahorrar y enviar dinero a sus familias. De a poco empezó a correrse la voz: “*En el norte de Chile hay una ciudad donde faltan manos y se paga bien*”. Parientes y amigos también se embarcaron en la aventura.

En esta primera oleada llegó desde Buenaventura Yeifer Aza Hurtado de 33 años. Trabajó la mayor parte del tiempo en una empresa contratista de la minería en Antofagasta y con lo que ahorró levantó su microempresa: una panadería que además vende productos típicos colombianos. “*Cuando llegué había muchas opciones de trabajo y la comunidad chilena no era tan reacia hacia nosotros. No tuve problemas para pasar la frontera. Es que los que llegamos primero, lo hicimos para trabajar; ahora han llegado muchos a los que no les gusta el trabajo*”.

Era una época en que el precio del cobre llegaba a la cifra récord de cuatro dólares la libra. Eso significó que se abrieran decenas de megaproyectos en la región de Antofagasta, la cual vive y muere por la minería. A su vez, los proyectos inmobiliarios se multiplicaron. La escasez de mano de obra era tal, que los avisos de empleo se encontraban pegados en postes de luz y quioscos de revistas: Se necesitan guardias, se necesitan maestros de la construcción, se necesita personal de aseo…

Guillermo Morales es un chileno dueño de un taller vulcanizador. La mayoría de sus empleados son colombianos. “*Nunca he tenido un problema con ellos, son súper trabajadores y responsables, me preocupo de enseñarles el trabajo y traspasarles valores. Acá son unos pocos los extranjeros que llegan a delinquir y no por ellos van a tener que castigar a todos los que vienen a trabajar como corresponde*”.

A medida que el precio del cobre comenzó a bajar y la cantidad de migrantes siguió aumentando, surgieron las tensiones. Las primeras se hicieron manifiestas a través de grafitis xenófobos en las afueras del Departamento de Extranjería, donde los migrantes hacen filas desde madrugada para regularizar sus papeles: “*Colombianos apestan*”, apareció escrito una mañana.

Luego, en octubre de 2013, vino el partido de fútbol entre Chile y Colombia durante las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014. La celebración por el empate 3 a 3, que condujo a la clasificación de los colombianos, terminó en choques y disturbios en las calles de Antofagasta. A raíz de esto se convocó a una marcha contra los inmigrantes a través de Facebook que, a pesar de no tener gran convocatoria, dio la vuelta al mundo y puso en boca de periodistas nacionales y extranjeros los incipientes brotes de racismo y xenofobia que existen en Chile.

Uno de los argumentos frecuentes de la inconformidad con los colombianos, es la supuesta relación de muchos migrantes con estructuras de crimen organizado y de narcotraficantes. A pesar que las cifras oficiales de la Defensoría Penal Pública chilena muestran que el 96 por ciento de los delitos en la región de Antofagasta son cometidos por nacionales, un sector importante de la población sigue culpando a los recién llegados de una “*mayor sensación de inseguridad*”. Este imaginario colectivo se refuerza cada vez que detienen a alguien de esa nacionalidad por delitos relacionados con drogas.

En particular ciudades como Iquique y Antofagasta, cada vez presentan más de estas noticias pues el vecino desierto de Atacama se viene convirtiendo en una ruta de droga desde Paraguay o Bolivia, hacia las ciudades portuarias del país austral.

De hecho una de las modalidades identificadas es el canje de droga por vehículos robados, delito que se ha incrementado. La transacción se hace en pleno altiplano. La policía chilena ha logrado identificar más de 100 pasos ilegales en los 1.300 kilómetros de frontera de la zona norte. Este año en un operativo nombrado “Escudo Norte 2”, en cuatro días de labor se logró la desarticulación de una banda y la incautación de 90 kilos de diferentes drogas. Este es un decomiso menor comparado al efectuado en abril de 2013, cuando se logró la captura de una organización criminal formada por cuatro chilenos que pretendía comercializar 1,5 toneladas de pasta base, marihuana y cocaína.

Pero los casos que más comentarios generan en redes sociales, generalmente son los que involucran a colombianos. En 2009, por ejemplo, se sucedieron una serie de detenciones de ciudadanos de esa nacionalidad por tráfico en Chile. En una de ellas se detuvo a una banda integrada por cuatro colombianos y un chileno que comercializaban cocaína en el Barrio Rojo de Antofagasta, sector donde abundan los bares y cabarets. Más cerca, en mayo de 2013, una banda de dos colombianos y dos bolivianos fue atrapada mientras traficaba marihuana, cocaína y pasta base desde Bolivia con rumbo a Iquique, Antofagasta y finalmente Santiago. Y este año un operativo terminó con la detención de siete colombianos -y otras siete personas de diversas nacionalidades- quienes fueron imputados por vender drogas en una peluquería ubicada en pleno centro de Santiago.

De hecho, expresiones como “*Antofalombia*” se acuñaron para referirse a cómo la ciudad ha cambiado desde el arribo de los colombianos. La mayoría lo usa en forma despectiva, manifestando que Antofagasta era mucho más segura sin ellos. Hasta políticos le han echado la culpa a los migrantes por la falta de recursos en el hospital, por el supuesto aumento de enfermedades venéreas e incluso por el alza de las infidelidades. Frente a estas percepciones, la frase del exintendente de Antofagasta Waldo Mora, se ha convertido en un memorable eslogan: “*Algunos extranjeros están generando problemas de convivencia y quiebres matrimoniales*”.

La frontera legal también se ha endurecido. A los colombianos se les empezaron a exigir cada vez más requisitos de entrada, y su ingreso es rechazado frecuentemente en las aduanas. Con esto, también aumentó el ingreso irregular y el tráfico de personas.

Entre enero y septiembre de 2014 se han efectuado 44 denuncias por tráfico de inmigrantes en la Fiscalía de Iquique, ciudad portuaria de Chile. Más al norte, en el puerto de Arica, cerca de la frontera con Perú, se han reportado 16 denuncias, tres veces más que la registradas el año pasado. Sin embargo, ninguna de las dos cifras oficiales refleja la abultada realidad encontrada en la frontera por los periodistas de este especial. “*El tráfico y la trata están en notorio aumento*”, reconocen desde la institución.

Actualmente las condiciones económicas de la región de Antofagasta son más débiles que cuando comenzó el fenómeno. El precio del cobre bajó, se paralizaron proyectos mineros e inmobiliarios y Chile en su conjunto vive una desaceleración económica. Pero la migración no se detiene. Si antes era la economía, ahora el principal argumento para llegar al país del sur es la búsqueda de seguridad, no importa en qué condiciones. “*Acá he llorado mucho por lo que nos ha tocado, pero sé que Colombia está muy complicada”* dice Jenny Márquez, originaria de Cali, quien actualmente vive en Mujeres Unidas, uno de los campamentos de Antofagasta, la versión chilena de las favelas.

**El cruce clandestino**

*Esta es la historia de dos familias de migrantes que luego de ser rechazado su ingreso a Chile en varias oportunidades, emprendieron de la mano de coyotes el peligroso y extenuante camino del cruce fronterizo.*

En abril de 2013 Steban Jaramillo y Jenny Tenorio llegaron hasta la aduana de Chacalluta, ubicada entre las ciudades de Tacna (Perú) y Arica (Chile). Su intención era ir a probar suerte a Antofagasta. De su barrio ya eran decenas los que habían tomado el mismo rumbo y el comentario que se esparcía entre sus vecinos en Cali era que “*allá faltan trabajadores y la paga es buena*”. En su ciudad natal, en cambio, no encontraban empleo.

Mientras estaban en la fila de la aduana chilena, un funcionario pasó vociferando con un altoparlante una frase que aún recuerdan con claridad: “*La familia de Pablo Escobar no va pa’ Chile*”. El mensaje era para todos los colombianos. No alcanzaron a mostrar sus documentos en la ventanilla y ya los estaban embarcando de vuelta a Tacna. “*Ni siquiera nos preguntaron a qué veníamos o si traíamos el dinero suficiente*”, relata Steban.

Pero la decisión de la pareja estaba tomada. Pasarían a Chile sí o sí. Con los ahorros que tenían viajaron a Bolivia y llegaron al pequeño poblado de Pisiga. Una amiga que andaba con ellos intentó cruzar, pero la rebotaron igual que en Chacalluta. Se convencieron de que la única forma de alcanzar el sueño chileno era por un paso no habilitado. Estuvieron una semana analizando cómo lo harían.

Finalmente se reunieron en un grupo de cuatro mujeres y cinco hombres, la mayoría de origen colombiano, y guiados por un coyote chileno que les cobró 120 dólares por persona, salieron una noche desde Pisiga. Caminaron a 3.800 metros de altura durante una hora y media, hasta que llegaron a Colchane, Chile. En esa zona se conocen al menos 14 pasos no habilitados, los cuales son frecuentemente utilizados por narcotraficantes o contrabandistas de vehículos robados que se venden en Bolivia o en Paraguay.

Después de descansar en Colchane, recuerda Steban, una furgoneta negra “*parecida a la de Los Magníficos*” los recogió y los llevó hasta un punto de la carretera justo antes de un retén de carabineros. Esperaron nueve horas en el vehículo hasta que anocheciera. Luego, después de avanzar varios kilómetros, nuevamente se tuvieron que bajar y caminar dos horas por el desierto. “*El primer trayecto tenía un polvo que te tragaba; el segundo unas inmensas rocas con las que te tropezabas. Incluso hubo tres personas que se cayeron a un barranco, pero por suerte no se fracturaron*”, cuenta Jenny.

El viaje terminó en Iquique, donde el grupo se separó, aunque la mayoría decidió seguir a Antofagasta.

En la semana que pasaron en Pisiga, esta familia recuerda haber visto unos 300 extranjeros cruzando irregularmente, todos de países latinoamericanos y un buen porcentaje personas de raza negra. “*Había un negrito que lloraba y era de República Dominicana. Él decía que además le habían inhabilitado el pasaporte por ser negro*”, relata Jenny. Los precios que cobraban los coyotes por el cruce variaban entre los 120 y 220 dólares por persona.

Una vez en la ‘capital del cobre’, Jenny descubrió que estaba esperando un bebé. De hecho, había efectuado la travesía con dos meses de embarazo. Su hijo, Matías, nació en octubre de 2013 en el Hospital Regional de Antofagasta. En ese recinto actualmente uno de cada cuatro partos corresponde a una mujer extranjera.

A pesar de nacer en la nación del sur, el Registro Civil no inscribió a Matías como chileno, por lo que esta familia decidió entablar una batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema. En fallo dividido, el organismo decidió entregar la nacionalidad chilena a Matías. Ahora ellos esperan que su situación legal en el país pueda regularizarse. “*Y si me sacan de Chile, me vuelvo a meter*”, dice convencida Jenny.

**Las fuerzas que da huir del terror**

Dos padres y sus ocho niños caminan de noche intentando llegar a Colchane. Los más pequeños están agotados, pero es una de las últimas etapas de un viaje que decidieron emprender para escapar de la violencia.

Los Landázuri Montaño tenían una carreta de frutas en la ciudad de Tumaco, Colombia. Willie, el padre de familia, recibió amenazas de grupos paramilitares si no les pagaba un “*impuesto*”. Además su hija Amy recibió un disparo en la cabeza en medio de una balacera entre policías y delincuentes. El balín todavía está inserto en uno de sus oídos.

Willie y su esposa Liliana vinieron a Chile por primera vez hace cuatro años, los dos solos. Dejaron a sus siete hijos allá. En la frontera presentaron sus papeles para solicitar refugio, pero fueron rechazados.

Se fueron a Pisiga, Bolivia, donde cruzaron clandestinamente esquivando la aduana.

Una vez en Antofagasta, nació su octavo hijo. Un año después deciden volver a Colombia por el resto de la familia.

En un viaje eterno, cruzaron gran parte de Sudamérica hasta que llegaron nuevamente a Bolivia, donde incluso unos policías, que se apiadaron por su situación, les convidaron agua y comida, además de dejarlos continuar.

En su primer paso clandestino, la pareja fue ayudada por una mujer boliviana. La segunda vez lo hicieron sin ayuda, pasando de noche y en silencio a pocos metros de la aduana. “*Fue el peor viaje de mi vida*”, recuerda uno de los hijos mayores.

La familia lo logró y se instaló definitivamente en Antofagasta, en uno de los barrios más vulnerables de una ciudad que actualmente es vista como sinónimo de progreso, pero también de desigualdad.

Una junta de vecinos les entregó un terreno que era utilizado como basurero y ellos lo limpiaron y construyeron algo parecido a una casa. Willie se dedica a vender papas rellenas y ensaladas de fruta en un pesado carro que arrastra con su cuerpo por la línea del tren todos los días hasta el vertedero municipal de la ciudad. Ahí vende sus productos a los recolectores de basura, quienes se transformaron en sus principales clientes. Todos sus hijos asisten a la escuela y uno de ellos juega fútbol en las divisiones inferiores del Club de Deportes Antofagasta, equipo que milita en la Primera División Profesional.

Entre tanto, a su hija más pequeña, nacida en Antofagasta, se le negó la nacionalidad chilena inicialmente. Finalmente, la organización de la sociedad civil Migr-Acción logró que se la entregaran.

“*Nosotros nos dedicamos a trabajar y nos queremos quedar en Chile. Es la historia de nuestra familia, dura pero real*”, dice Liliana, quien ahora espera su noveno hijo.

Los Landázuri Montaño tienen un decreto de expulsión en su contra desde hace tres años.

El abogado de Migr-Acción, Ignacio Barrientos, explica que en ambos casos, el ingreso de forma clandestina al país fue una causa directa del “rebote” en la frontera. “*Quisieron entrar con su pasaporte por la vía normal y su ingreso fue negado en las aduanas. Finalmente decidieron pasar de forma clandestina. Ahí también se debe revisar la legalidad de la actuación de los controles migratorios. Muchos pueden decir que está dentro de la normativa, pero el grado de discrecionalidad y arbitrariedad que se utiliza es absolutamente cuestionable*”, dice.

Para el abogado, la migración no se va a detener con este tipo de rechazo. “*Hay muchos factores: principalmente el miedo a quedarse y la esperanza de encontrar un lugar donde mejorar las condiciones de vida de tu familia. Si después de seis intentos te siguen rebotando, vas a convencerte que la única manera de ingresar al país es por la vía clandestina. Además, hay una gran oferta para cruzar por pasos ilegales*”.

En el caso de la familia Jaramillo Tenorio, ellos se autodenunciaron. Como su hijo es chileno, si llegan a ser expulsados también se estaría exiliando a un niño de nacionalidad chilena. “*Si expulsan a uno de los padres, se estaría vulnerando el derecho del niño a tener una familia. A eso estamos apelando en estos casos*”.

**Bienvenidos al campamento Colombia**

*La versión chilena de las villas argentinas o las favelas brasileñas las llaman campamentos. Estas tomas de terreno donde se levantan improvisadas casas de madera, lata, cartón y plástico albergan a cada vez más colombianos. Pese a las evidentes necesidades, muchos consideran que sólo por la seguridad ya están viviendo un paraíso comparado al infierno del que salieron.*

En 2011 había 14 campamentos en Antofagasta. Hoy son más de 20. Cada mes, nuevas familias se incorporan a estos asentamientos irregulares y los principales nuevos habitantes son migrantes colombianos.

La causa principal es el alto costo de la vivienda. El arriendo de una casa de dos dormitorios en un barrio humilde de la ciudad supera los 600 dólares. Para los colombianos, cuyo sueldo no supera los 500 dólares, la única opción es construir ranchos en tomas o invasiones, pese a que algunos sufren discriminación y terminan siendo expulsados.

Los dos campamentos con mayor número de colombianos son el Mujeres Unidas y el Víctor Jara. Cada uno de ellos tiene alrededor de 50 familias y el 70 por ciento de ellas son extranjeras.

Eliana Martínez es vicepresidenta del campamento Mujeres Unidas y jefa de hogar de una de las cinco familias chilenas que quedan en esta villa. Hace nueve años construyó su rancho y sin proponérselo se convirtió en fundadora de esa barriada.

La dirigente explica que desde el año pasado el número de casas casi se duplicó. Pasó de 23 a 43. La mayoría de los nuevos vecinos son colombianos. “*Ahora somos tanta gente que es difícil mantener la armonía, así que hay que tener paciencia y tolerancia. De los colombianos no tengo nada que decir. Se portan bien, aunque entre comillas: cuando se les pide que limpien, ayudan, pero lo que molesta es la bulla*”.

Berta Arboleda es colombiana y vecina de Eliana. Llegó de Buenaventura hace cuatro años en busca de trabajo. La razón por la que vive en el campamento es el alto costo del arriendo. “*Estuve tres años arrendando pieza, pero preferimos venirnos porque era muy caro. Lo más difícil de vivir acá es el tema de los baños*”, simplemente no hay. Son orificios improvisados como pozos sépticos en los solares que quedan.

La pobladora sostiene que la situación económica está más “*apretada*” que cuando llegó. “*Hay menos puestos de trabajo y se está pagando poco*” comenta con resignación al referirse a los 406 dólares que recibe.

La mayoría de los colombianos que viven en campamentos aseguran que tenían mejores condiciones de vivienda en su país que en Antofagasta, o que incluso eran propietarios. Pero la falta de trabajo los empujó a buscar otro país. “*Uno no se puede comer la casa*”, dice Jenny Márquez, originaria de Cali.

Jenny explica que es asistente social, pero la empresa en que trabajaba en Colombia cerró. En Chile no ejerce su profesión porque no ha validado su título. “*Trabajo como administradora en una buena empresa, me ha ido bien. Pero cuando me traje a mis hijas y nieta, me fue muy complicado seguir pagando la pieza*”. Sus ingresos no le alcanzaban para cubrir los 610 dólares que le cobraban por dos piezas y por eso no encontró más opción que moverse a un campamento.

El campamento está formado por un grupo de familias que vive en una situación irregular de terreno. Pueden ocupar o tierras del Estado o privadas. Es prácticamente imposible encontrar alguno que goce de los tres servicios básicos: luz, agua potable o alcantarillado.

Buen porcentaje de las casetas o mediaguas tiene piso de tierra y el baño es un pozo negro. No tienen agua potable, aunque algunas veces se “cuelgan” de matrices de agua -como en el caso del campamento Mujeres Unidas-. También se “cuelgan” de la luz eléctrica.

Diego Alcalde es director regional de la organización de la sociedad civil Techo, que trabaja con familias que viven en campamentos. Para Alcalde, es preocupante que en la ciudad con mayor Producto Interno Bruto de Latinoamérica el número de personas sin vivienda esté aumentando dramáticamente y que la población extranjera esté creciendo en los campamentos. Dice, “*es un círculo vicioso. La región requiere de mano de obra, pero no hay dónde acomodarla. Lo único que les queda es llegar a vivir directamente en una toma. Es eso o vivir en una pieza con la familia*”.

El director de Techo explica que los migrantes se están transformando en los nuevos pobres de Chile. Vulnerables entre los vulnerables. “*En Antofagasta se ve agravada la situación por el alto costo del terreno y porque hace muchos años no se construyen viviendas sociales*”.

**Los ángeles de los migrantes**

*En Pisiga, último pueblo boliviano antes de cruzar hacia la localidad chilena de Colchane, dos monjas chilenas dan alojamiento a los extranjeros “rebotados”. El refugio de las religiosas es una prueba de cómo los rechazos se han vuelto sistemáticos.*

Son las dos de la tarde y un grupo de ocho migrantes camina por el desierto a 3.800 metros de altura. Salieron de Colchane hace una hora y el avance es lento bajo el sol abrasador. Esta población en el altiplano andino es la primera chilena al cruzar la frontera boliviana.

Algunos llevan las cabezas tapadas con camisetas que solo dejan ver sus ojos oscuros. Son una caravana de beduinos sudamericanos en una ruta que ha atravesado cinco naciones, con sus respectivas fronteras geográficas y culturales.

Las trombas de viento levantan la arena que se les incrusta como agujas en los ojos.

Tratan de hacer parar un bus, pero este sigue de largo. Hay controles carreteros y los transportistas prefieren evitar problemas.

Su primer destino es Iquique. Ahí ya podrán ubicar a conocidos, llamar a familiares y viajar a sus destinos finales. El de la mayoría es Antofagasta.

Aunque están en suelo chileno, los migrantes saben que si son encontrados por carabineros es muy probable que sean puestos nuevamente en la frontera con el pequeño poblado boliviano de Pisiga.

A pesar de su geografía hostil, Pisiga representa un reducto de esperanza para los miles de migrantes que cada año intentan cruzar de manera clandestina hacia Chile. El poblado está pegado a las aduanas boliviana y chilena. No hay muros o campos minados cercanos como sucede en otros cruces fronterizos. La travesía parece simple pues el primer caserío chileno, Colchane, está a unos tres kilómetros.

Sor Margarita Oyarzo recibió a 800 migrantes en lo que va de este año. De ellos, no cree que más de una veintena haya cruzado de forma regular. “*Intentan pasar por la aduana de manera legal, pero los rechazan una y otra vez. Nosotros les aconsejamos que no hagan un cruce clandestino, pero están empecinados en llegar a Chile. Ellos vienen huyendo de la violencia y la falta de oportunidades*”.

La congregación de las Hermanas de la Caridad abrió esta casa de acogida en Pisiga hace tres años. En un viaje una hermana vio que los migrantes quedaban en extrema vulnerabilidad después de ser rechazados en la frontera. Decidieron arrendar una casa y habilitarla como albergue para darles alojo momentáneo.

Este año dos monjas chilenas están a cargo de la casa: Sor Margarita y Sor Dora Antimán. La segunda también es del sur, de Panguipulli.

Sor Dora explica que muchos de los migrantes son robados o estafados en el camino. “*Durante un tiempo llegaban algunos con un papelito que compraban en Tacna, pensando que con él podían pasar por Colchane, pero no les servía de nada*”.

La mayoría de quienes llegan hasta la casa de las monjas son colombianos. Estos migrantes deben estar legales en Bolivia para que se les pueda dar alojamiento. Sor Margarita agrega que si están sin papeles no pueden recibirlos, “*ya que la policía boliviana cada cierto tiempo viene a revisar la casa y los bolsos de las personas. En todo caso, eso también nos da seguridad*”.

“*Esta frontera es permeable. No es como en Israel o Estados Unidos que tienen un muro*”, dice un funcionario de la aduana de Colchane.

Los controles aduaneros están pegados al pueblo de Pisiga. Una reja de dos metros rodea a la oficina chilena, pero si alguien quiere cruzar a pie entre Pisiga y Colchane, evitando los puestos fronterizos, puede hacerlo fácilmente internándose un poco en la planicie.

Auque hay cámaras térmicas vigilando de manera permanente, de noche es prácticamente imposible bloquear la inmensa pampa. Por eso, este es uno de los sectores favoritos de los contrabandistas para cruzar droga hacia Chile y vehículos ‘chutos’ o robados a Bolivia.

Los decomisos de droga son de todos los días en esta aduana. “*Hoy en la mañana detuvimos a una mujer boliviana de 30 años que llevaba 75 ovoides. En total son 196 gramos de cocaína*”, explica el funcionario, mostrando una bolsa de un tamaño difícil de imaginar en el cuerpo de una persona.

Sobre el rechazo de migrantes colombianos que llegan con todos sus papeles, el funcionario explica que se produce porque no tienen solvencia económica y se presentan como turistas, “*cuando en realidad vienen para buscar trabajo en ciudades como Antofagasta, donde ves colombianos en todos lados*”.

Solvencia es la palabra clave. Aunque la ley chilena la pide a quienes ingresan como turistas, no fija un monto específico. De esta manera, queda finalmente a discrecionalidad del funcionario de turno de la Policía de Investigaciones (PDI) dejar o no pasar.

Entre enero y septiembre del año pasado, 12.655 extranjeros no fueron admitidos en las aduanas chilenas, según cifras oficiales de la PDI. 5.688 de ellos eran colombianos. La cifra, sin embargo, podría ser aún mayor, ya que migrantes denuncian que muchos de ellos no alcanzaron a llegar a la ventanilla para mostrar sus papeles cuando fueron expulsados de aduanas como Chacalluta y Colchane.

Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), explica que en mayo de 2013 efectuaron una misión por Colchane y hablaron con las monjas de Pisiga. “*Hay situaciones de xenofobia que se presentan por parte de algunos agentes del Estado de Chile*”, asegura Fries, y agrega que, durante su estancia en Colchane, el INDH recibió denuncias de migrantes según las cuales el “*personal de la PDI les lanzó los pasaportes y los insultó con epítetos racistas*”.

En un informe presentado a finales de mayo del año pasado, el INDH recomendó tanto a la PDI como a Aduanas que revisaran sus procedimientos y reconoció que, así como hay casos de violencia, también ha registrado “*preocupación por parte de otros funcionarios y autoridades para avanzar en capacitar a su personal respecto a los derechos de las personas migrantes y así crear una cultura de respeto*”. Para la abogada “*este es un trabajo de largo aliento que, por supuesto, no se soluciona de un día para otro*”.

**Como en la ruleta**

Cinco jóvenes colombianos esperan desde hace tres días el momento indicado para cruzar a Chile. Dicen que lo intentarán de la manera legal, pero que si son “rebotados” van a cruzar como clandestinos. Las monjas que los hospedan trataron de convencerlos de que no lo hagan, pero para ellos no hay vuelta atrás.

Son dos mujeres y tres hombres. No se conocían de antes, pero parecen amigos de toda la vida.

Ingrid es de Pereira, tiene 19 años y es la menor del grupo. Su familia está en Copiapó y es primera vez que hace esta ruta por tierra. “*La primera vez llegué en avión y estuve con todos mis papeles*”. Aunque nunca ha sido rebotada, tiene miedo de que no la dejen entrar y no descarta cruzar clandestinamente.

Demetrio, de 30 años, va a Iquique, donde lo espera su esposa. Aunque ya ha ido varias veces a Chile, en esta ocasión fue rebotado. “*La primera vez que intenté pasar tenía solvencia y todo, pero igual me rechazaron*”. Mira hacia el cielo y apunta con el dedo: “*Todo depende del de arriba, porque hay días que de cinco pasan dos y otros que no pasa nadie. Un amigo lo rebotaron dos veces en Tacna y acá pasó. Nos avisó que estaba suave, lo intentamos nosotros, pero no nos dejaron*”.

Jairo es de Buenaventura y tiene 32 años. Esta es segunda vez que intenta cruzar a Chile. Su destino es Antofagasta, donde vive un primo. “*La primera vez me rebotaron en Tacna. Me vine a Bolivia y me robaron todo en El Alto. Llevó dos años en Bolivia. Trabajé en minería, no me puedo quejar, me ha ido bien, pero ahora la cosa se ha apretado más. Mi primo me dice que me vaya para Antofagasta que está mejor y así estoy más cerca de la familia*”.

Oscar es de Cali y tiene 30 años. Su idea es llegar a Antofagasta o Santiago. “*Vine en búsqueda de oportunidades de trabajo porque en mi país está muy complicado. Ya intenté pasar por Tacna y por acá y me rebotaron. Mi plan es pasar como sea*”.

Mariluz, de 34 años, tiene a su esposo en Antofagasta. Ella ya vivió ahí y ahora va de regreso, pero como la primera vez también cruzó irregular, es prácticamente imposible que pueda pasar por la aduana. “*En Antofagasta hay más oportunidades que en Colombia*”.

Mientras caminaban por Pisiga, un coyote se les acercó para ofrecerles paso a Chile. Pero no quisieron tomar la oferta. “*Se notaba que no era confiable*”, dice Demetrio.

No son sólo colombianos. Virgilio no pasa desapercibido. Es un moreno de casi dos metros. Va vestido de negro, con los zapatos llenos de polvo y una gorra que dice “U.S.A”. Se acerca y pregunta: “*¿Dónde puedo tomar bus a Iquique?”.*

-Un poco más allá paran buses, justo donde están las señoras vendiendo comida. ¿De dónde vienes?

-De Ecuador, pero soy de República Dominicana.

-¿No tienes equipaje?

-Me lo robaron todo en el viaje. Ando con lo que me ve encima.

-¿Y por qué te viniste a Chile?

-Porque escuche que acá hay trabajo y lo necesito.

-¿Cómo cruzaste?

-Por el lado de la aduana. No tengo papeles ni nada. Me robaron todo.

Son las nueve de la mañana en Colchane. Pasa una camioneta de carabineros y Virgilio se echa para atrás, entre las vendedoras de los puestos. La policía sigue su camino.

El puesto de carabineros está a menos de 50 metros de la parada de buses, por lo que cada cierto rato aparecen pidiendo documentos.

Escabullendo su notorio cuerpo, quizás Virgilio logre con éxito su aventura.

**Coyotes al acecho**

*Este año se han registrado 60 denuncias judiciales por tráfico y trata de personas en la zona norte de Chile. En algunos casos, los migrantes deciden pagar por un cruce clandestino a sabiendas de las sanciones que se exponen. En otros, son convencidos de que todo será legal, pero al final del viaje les quitan hasta el último céntimo y los abandonan en el altiplano.*

“*Ya no podía más”, recuerda Liz, “la altura y el frío acabaron con mis fuerzas*”. Relata el punto más crítico de su travesía en el altiplano, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, rodeada de nieve y rocas. Allí fue abandonada junto a un grupo de 15 personas más, la mayoría de República Dominicana, como ella.

Los “coyotes” les dijeron que los esperaran, que estaban apenas a 20 minutos de Iquique así que podían llegar caminando. Los migrantes les creyeron. No sabían que en realidad se encontraban recién en la cordillera de Los Andes y que para llegar a Iquique faltaban más de 200 kilómetros de desierto.

No volvieron por ellos. Quedaron abandonados a su suerte en una tierra casi deshabitada. Caminaron por horas hasta encontrar una vivienda de pastores aymaras. Los dueños de casa no querían escucharlos. Los migrantes les imploraron que por lo menos ayudaran a Liz, “*que está embarazada*”. La respuesta nuevamente fue negativa. “*Entonces por favor denúncienos a la policía”.* A eso sí accedieron.

Carabineros del Retén Cancosa los recogió y traslado hacia su cuartel. Ahí el grupo comió y se abrigó después de varios días de haber vivido un infierno. “*Fue la primera muestra de humanidad*”, recuerda Liz Dorvielle que aún agradece el trato recibido. Estuvieron cinco días en el retén porque la nieve estaba tan alta que no podían salir. En ese transcurso los carabineros encontraron a otros 17 migrantes también abandonados, en un lugar cercano al que dejaron a Liz.

El calvario de esta dominicana de 23 años había comenzado mucho antes, en su país natal. Explica que producto de una agresión de su expareja, decidió tomar rumbo a Antofagasta, Chile, donde vive su madre. Voló con un amigo hasta Ecuador y en el trayecto entre el aeropuerto y el hotel le preguntó al taxista cómo podía llegar a Chile. Éste la contacto con los “coyotes”. Liz asegura no haberse dado cuenta que en realidad se trataba de una red de tráfico de personas. Incluso recibió una tarjeta de identificación andina, que resultó ser falsa.

En la frontera entre Ecuador y Perú cayó en razón. Antes de cruzar un puente, la hicieron bajar del vehículo, obligándola a caminar durante tres horas. Luego el viaje continuó en autobús hasta Lima y luego en otro bus hasta Tacna. Desde allí fueron llevados a Desaguadero, en la frontera entre Perú y Bolivia. Relata que en el camino los policías peruanos los detuvieron varias veces, pero mediante el pago de una coima, a cuenta siempre de los migrantes, los dejaron continuar.

En Bolivia los alojaron por tres días amontonados en un gallinero. “*Allá los traficantes intentaron abusar de las mujeres y los otros dominicanos nos defendieron*”, relata Liz. Después de eso, los subieron nuevamente a un viejo vehículo y terminaron abandonados en el desierto chileno. Era mayo de 2014. Liz actualmente se encuentra en Antofagasta, a pocos días de dar a luz.

Sobre ella pesa una sanción de expulsión que podría concretarse una vez nazca su tercer hijo. “*Pensaba que podría más adelante traerme mis otros niños, que llegaría legal a Chile, pero nos trajeron engañados y ahora estoy de irregular*”.

**Lucha contra el delito**

Félix Corozo Cortez de 61 años era uno de los extranjeros más buscados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). El ecuatoriano estaba acusado de tráfico de inmigrantes, un delito que hasta hace una década prácticamente no se registraba en el país austral, pero que hoy ha crecido en tal magnitud que una unidad especializada de la Fiscalía Nacional está investigando los casos.

Corozo había logrado eludir a los policías hasta mayo de este año, cuando fue detenido cruzando por la costa con dirección hacia Arica. Junto a él iban siete colombianos que le habían pagado 100 dólares cada uno. Corozo los había contactado unos días antes cerca del terminal de buses de Tacna. La travesía comenzó en taxis que dejaron al grupo cerca de la aduana peruana de Santa Rosa. Después de eso, caminaron hasta la costa. Ya en territorio chileno, fueron interceptados por la PDI.

La de Corozo es una de las 60 causas judiciales que se han abierto este año contra bandas o particulares sorprendidos ingresando extranjeros –la mayoría colombianos– por pasos no habilitados del norte de Chile.

El innegable aumento en este tipo de delitos llevó a que La PDI creara una unidad especializada en la zona norte: la Brigada Investigadora de Trata de Personas. El comisario a cargo, Cristian Rojas, explica que el caso más emblemático fue la “Operación Hito 23”, en la cual se desmanteló una red que internaba migrantes principalmente de República Dominicana, con la promesa de contratos de trabajo en Chile. “Durante el año 2013 tras cinco meses de investigación, se logró identificar y detener a personas que se dedicaban a internar ilegalmente a dominicanos a nuestro país a cambio de dinero bajo la fachada de una empresa de turismo”.

En la causa hay cuatro imputados que ya fueron condenados, mientras otros cuatro están detenidos a la espera del Juicio Oral, entre ellos Clara Josefina Corporán Minaya, quien sería la dueña de la falsa empresa y fue extraditada desde República Dominicana.

El primer caso judicializado –y que terminó en condena– se registró en 2012. Tres sujetos establecieron una red de tráfico de inmigrantes en Tacna. Previo cobro de dinero, cruzaban clandestinamente a los extranjeros, primero dentro de un camión y después haciéndolos caminar por el desierto. Eran llevados a Arica y posteriormente hasta el sur del país.

La banda fue capturada mientras trasladaba a diez personas, entre ellas una embarazada y un menor de edad. A los migrantes incluso se les cobraba los gastos de las residencias donde los alojaban.

Otro de los casos de amplia repercusión se cerró durante 2013, resultando en una condena por tres años y un día de libertad vigilada contra Cristian Pérez Vásquez, un exasistente policial de la PDI que trabajaba en el complejo fronterizo de Chacalluta. Según la investigación realizada por la Fiscalía, Pérez Vásquez se aprovechaba de su cargo para ayudar a ingresar mujeres peruanas vulnerables que luego eran sometidas a explotación sexual en un domicilio de Arica.

El exfuncionario policial –que fue expulsado de la institución– incluso solicitaba favores sexuales a cambio de protección. La denuncia que terminó en su detención fue realizada por las mismas víctimas.

**Dilemas de otro tiempo**

*En medio del surgimiento de las redes de coyotaje y trata de blancas en la frontera, la sociedad chilena comienza a cuestionar la vigencia de un marco legal migratorio que refleja la lógica de una época diferente a la que llega con los vientos de integración latinoamericana.*

La frontera entre Tacna y Arica es una de las dos con mayor número de cruces clandestinos hacia Chile, a pesar de estar en gran parte minada. Sólo en lo que va del año se han abierto 16 causas judiciales contra bandas o particulares sorprendidos ingresando extranjeros –la mayoría colombianos– por pasos no habilitados.

Las formas más comunes son tres: caminando por la línea del tren, por la playa aprovechando que Arica es una ciudad costera a pocos kilómetros de la frontera, o en pequeños botes. Aunque también se han detectado inmigrantes siendo transportados escondidos en vehículos.

En la Fiscalía de Arica llama la atención que la cifra de denuncias por tráfico de inmigrantes se haya disparado durante 2014. De hecho, el 76 por ciento de los casos de los últimos tres años ocurrieron en lo que va del presente periodo.

El fenómeno de la inmigración en Chile se ha incrementado de forma notoria. De hecho, según cifras de la ONU, este es el país de Sudamérica donde más ha crecido el porcentaje de extranjeros. Mientras en 1990 había 107.000, actualmente se estima ese número en 440.000.

La región de Antofagasta es ícono de este proceso. Ahí se estima que residen casi 35 mil extranjeros, incluyendo los irregulares.

La bonanza minera ha incrementado el flujo de migrantes que, a su vez, se ha encontrado con el aumento del rebote en la frontera y el surgimiento de redes de coyotaje y trata de blancas que periódicamente abren nuevas rutas clandestinas entre el desierto y las montañas que unen a Chile con Perú y Bolivia.

Sin embargo, la discusión legal sobre la migración en este país supera la preocupación por controlar a las redes ilegales. Dentro de la opinión pública chilena, es la misma idea del migrante y el lugar que ocupa en la sociedad, lo que ha polarizado el debate.

En Antogasta, la sociedad está dividida. Una encuesta presentada en agosto de este año dio a conocer que el 50,1 por ciento de los antofagastinos no está de acuerdo con la inmigración. Pero ante la pregunta; ¿los inmigrantes son aporte al crecimiento y el desarrollo?, el 59,4 por ciento dijo que sí lo son. Sea que se muestren a favor o en contra del fenómeno, los antofagastinos, y chilenos en general, están de acuerdo en una cosa: la Ley de Extranjería es anacrónica y debe modificarse.

**Leyes que no integran**

La Ley de Extranjería data de 1975 y ha sido bastante criticada, hasta el punto de que los mismos parlamentarios aseguran que la normativa es obsoleta.

El senador por la región de Antofagasta, Pedro Araya, explica que esta ley fue dictada en plena dictadura militar, cuando Chile no era un destino comercial, turístico o de trabajo. “*Hoy nos hemos vuelto un país atractivo desde todo punto de vista para la migración. Como consecuencia de ello tenemos una ley que lo único que busca es un mero control de carácter formal respecto del ingreso y salida de extranjeros, pero su gran deficiencia es que no contiene una política migratoria clara. Y eso, obviamente, ha impactado en el quehacer diario del país en esta materia*”.

Por ello, su posición es que hay que modificar la Ley, pues no responde a los desafíos que hoy se tienen en temas migratorios. “*También debería regularse de mejor forma el ingreso y salida del país. Por ejemplo: en los casos en que a un extranjero se le vencieron los papeles o ingresó de manera irregular, pueden pasar años antes de ser expulsado. Esa persona tampoco puede buscar trabajo ya que no se lo otorga la respectiva visa, con los consiguientes problemas que ello trae aparejado*”.

Uno de los principales aspectos de la Ley de Extranjería actual es que está basada en el concepto de seguridad nacional del Estado y eso ha traído más de algún problema a quienes deciden venir a vivir a Chile. Así lo explica la directora de la organización de la sociedad civil Ciudadano Global, Marcela Correa, quien asegura que la actual normativa mira al extranjero como una amenaza y no como un aporte. “*Es una ley desactualizada que no responde a la realidad migratoria*”.

Si bien el gobierno del expresidente Sebastián Piñera propuso cambios a la ley, éstos no fueron muy bien vistos por la ONG, ya que desde su perspectiva, las indicaciones del proyecto no tenían un enfoque de derechos, sino que una visión economicista de la migración. “*El migrante es visto solo como mano de obra y no como una persona*”.

Además –dice Correa– mantiene la arbitrariedad y la discrecionalidad por parte de las autoridades. “*Sólo habla de promover los derechos de las personas migrantes, pero no los garantiza. Por otro lado, consideramos que así como en el gobierno de Piñera el avance fue la idea de legislar y actualizar el marco regulatorio, celebramos que el gobierno de Bachelet le diera una nueva interpretación del Registro Civil en relación al hijo de extranjero transeúnte, otorgando la nacionalidad a los niños nacidos en Chile que tienen padres extranjeros*”.

En definitiva, y en voz de los propios inmigrantes, esta ley solo genera colas interminables en la oficina de Extranjería, Gobernación y la PDI, acompañadas en ocasiones, de una atención poco digna. También hay problemas para obtener la visa solicitada y la cédula de identidad. Esto puede tardar más de un año, trayendo dificultades para arrendar una vivienda, crear una cuenta bancaria, afiliarse al sistema de salud estatal e incluso enviar o recibir dinero.

Para la gobernadora de la provincia de Antofagasta, Fabiola Riveros, esta ley ve la inmigración como una amenaza y como un mal, por lo tanto hace todo lo posible para que se complejice el ingreso y la permanencia de la persona en Chile.

Por regla general, los extranjeros entran a Chile con una visa de turista, la cual tiene un periodo de duración de 90 días. Si dentro de ese tiempo el inmigrante encuentra una posibilidad de trabajo, primero debe pagar derechos a Chile para poder laborar. La tarjeta de trabajo cuesta aproximadamente 80.000 pesos chilenos.

“*En este gobierno estamos promoviendo una mirada diversa. Michelle Bachelet, nuestra presidenta, ha señalado que nosotros no vemos la migración como una amenaza. La propuesta es mejorar el transporte de cargas y de personas. En este gobierno se conformará un consejo de ministros para así seguir avanzando de una política nacional migratoria*”.

Las ONG critican que la actual ley le da todo el poder al funcionario de turno para rechazar el ingreso de un extranjero hacia Chile. Por su parte, la PDI explica que cuando se advierte que un inmigrante está entregando datos falsos respecto a su estadía o residencia en el país, es su deber negarle la entrada.

El jefe de Extranjería de la PDI de Antofagasta, subprefecto Carlos Pizarro asegura que en la mayoría de los casos es fácil detectar a quienes están mintiendo respecto a su estadía en la capital regional.

“*Uno les pregunta dónde se van a quedar y dicen la dirección de un hotel y si tú calculas el dinero que traen para estar 90 días y el pago de 90 días en un hotel, no da la cifra. A veces diez personas dan la misma dirección y resulta que cuándo tú preguntas ¿conoce a ese señor?, ellos dicen que no. Es ahí donde el policía, con su facultad discrecional, les impide el ingreso al país. Hay cosas que tiene que evaluar el funcionario en la caseta fronteriza de forma inmediata*”, explica.

Sin embargo, las respuestas de los funcionarios poca o nula referencia hacen a los excesos y maltratos que se denuncian. Abusos que generan resentimiento, y pueden ser semilla de mayores divisiones.

Independientemente de las explicaciones oficiales, para muchos resulta evidente que la legislación actual está en mora de ser reformada. La discrecionalidad que hoy tienen los funcionarios de migración chilenos, no solo generan un clima ambiguo e inestable frente al inmigrante. Un ambiente que aprovechan los tratantes de personas para promover la ilegalidad y clandestinidad, y que hoy enfrentan los migrantes en la frontera.

**Los emprendedores en nuevas tierras**

*Juguerías, peluquerías, cibercafés y restoranes de dueños colombianos se multiplican por Antofagasta. Se trata principalmente de migrantes que llegaron hace más de un quinquenio y que pudieron subirse a la ola de los mejores años de la economía local.*

Yeifer Aza Hurtado de 33 años, llegó a Antofagasta hace ocho años desde Buenaventura. Trabajó la mayor parte de ese tiempo en una empresa contratista de la minería y el año pasado, con lo ahorrado, levantó su microempresa: una panadería que además vende productos típicos colombianos. Aunque la mayor parte de sus clientes son paisanos, también tiene compradores chilenos que acostumbraron su paladar a las papas rellenas, buñuelos y la Pony Malta. “*La idea es mostrar al chileno lo que hacemos, pues últimamente nos ven como malos*”, dice.

Yeifer cree que arribó a la capital del cobre en el momento indicado. Faltaba mano de obra y los colombianos eran muy pocos. Su local está entre las calles Sucre y Bolívar, un barrio donde son mayoritarios los letreros comerciales con los colores amarillo, azul y rojo de la bandera colombiana. Peluquerías, restoranes, juguerías, panaderías, cibercafés y pequeñas tiendas de ropa se han multiplicado en este sector.

A media cuadra de allí está el cibercafé Juaquín, propiedad de Deiton Fermín, quien llegó hace 5 años a Antofagasta procedente de Tumaco. “*No había escuchado hablar de Antofagasta hasta que un amigo que estaba acá me recomendó venir*”.

En Colombia dejó su negocio y su carrera universitaria apostándole a esta aventura de prosperidad y tranquilidad, pero sus primeros días en Chile fueron complejos.

Su primer empleo –como muchos colombianos que llegan a Antofagasta- fue como obrero de construcción. El sueldo era de sólo 400 dólares.

Con el tiempo encontró otro trabajo en un karaoke. Durante tres años laboró día y noche en esos dos empleos. “*En el día estaba en la construcción y en la noche en el pub. Fue la única forma de despegar*”. Juntando los dos sueldos y las propinas, reunía mensualmente unos 1.800 dólares.

“*Dormía dos horas en la mañana y dos horas en la noche. Con esa vida hasta subí de peso*”, dice como quien cuenta una pilatuna.

Hace un año se decidió a montar un cibercafé y centro de llamados donde la mayoría de los clientes son colombianos que van a hablar con sus familias.

Deiton cree que se quedará en Antofagasta. Ya tiene un hijo nacido ahí y sostiene que Chile “*es un país en crecimiento, ya no está entre los subdesarrollados. La economía está muy bien, hay estabilidad*”.

Sobre si fue una buena decisión migrar relata que “*cuando llevaba dos años acá pensaba que no avanzaba mucho. Poco a poco empecé a juntar y guardar platica. Después de cinco años ya puedo acceder a ciertos privilegios, pero costó mucho trabajo*”.

Una situación similar es la de Deysi, la matriarca de la familia Montaño Segura. Ella llegó a Antofagasta hace ocho años a trabajar en un restorán instalado por uno de los primeros colombianos que llegaron a la ciudad. Al tiempo decidió independizarse, pero no la tuvo fácil. Con un carro se dedicó a vender ensaladas de fruta por las calles de Antofagasta, principalmente en la Feria de Las Pulgas.

Trajo a cinco de sus siete hijos. Con lo ahorrado, puso un primer puesto de jugos en el centro de la ciudad. En pocos años logró hacer crecer su miniempresa y actualmente cuenta con dos restoranes y cuatro juguerías. Uno de estos restoranes está ubicado en el pequeño pueblo minero de María Elena. “*Sufrí y derrame lágrimas, incluso me estafaron, pero salimos adelante y ahora vivimos bien y pudimos comprarnos una casa en Colombia*”, dice con orgullo.

Todos los hijos trabajan en sus locales. Uno de ellos, Harry Montaño, llegó hace seis años a Antofagasta. Tenía 17 años y quería ser futbolista. Incluso jugó en las inferiores del Club de Deportes Antofagasta. “*Tuve malas juntas y perdí la opción. Pero como mi mamá montó los locales, nos dio la oportunidad de trabajar a toda la familia*”.

Harry también está acostumbrado a Chile. Tiene dos hijos con una chilena y ve su futuro en esta tierra que conoce más que Colombia. “*Mi país es violento y la vida no vale nada. Si tienes un poco de platita, te pueden raptar un hijo. En Colombia hay envidia de que el otro prospere. Los “dueños de la ajeno” cobran impuesto. Allá vi cómo asesinaban a gente en la calle. Acá nunca he visto algo así*”.

**El Nuevo Éxodo Latino**

Es un reportaje liderado por el diario El Mercurio de Antofagasta, de Chile y la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS, en alianza con el portal colombiano Agenda Propia, el peruano Útero.Pe y VICE Colombia

**Reportería**

Cristian Ascencio Ojeda, Tamara Miranda Varela, Dánae Rivadeneyra, Edilma Prada

**Edición**

Juan Camilo Maldonado, Carlos Eduardo Huertas

**Fotografía y video**

Rodrigo Selles Ferrés, Edgard Cross Buchanan, David Bustos, Brice Le Borgne, Miguel Coaquira

**Desarrollo web**

David Bustos

**Infografías**

Macarena Sánchez Rubilar

**Dirección**

Cristian Ascencio Ojeda, Carlos Eduardo Huertas